



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CONFLICTO DE TRABAJO 3/2008-C  
SUSCITADO ENTRE HILARIO PÉREZ  
MARMOLEJO Y EL DIRECTOR GENERAL  
DE ATENCIÓN Y SERVICIO DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA  
NACIÓN Y OTRO**

México, Distrito Federal, Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al lunes diecisiete de agosto de dos mil nueve.

**VISTOS; Y,  
RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Hilario Pérez Marmolejo, mediante escrito presentado ante la licenciada Yolanda Arboleya Olivares, persona autorizada para recibir promociones de término, el diecinueve de septiembre de dos mil ocho y presentado posteriormente ante la mesa de control de correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación el veintidós de septiembre siguiente, demandó al Comité de Gobierno y Administración y a los Directores Generales de Personal, de Atención y Servicio así como de Seguridad, todos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

la reinstalación en el cargo que venía ocupando y el pago de diversas prestaciones económicas.

**SEGUNDO.** Por auto de dos de octubre de dos mil ocho, la Tercer Integrante y Presidenta de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación ordenó la formación del expediente respectivo, el que se registró con el número 3/2008-C; tuvo a Hilario Pérez Marmolejo formulando demanda laboral; por señalado el domicilio que indicó para oír y recibir notificaciones, por designado a su apoderado legal y por autorizados a los licenciados que señala; asimismo, previno al actor para que dentro del término de tres días, conforme al artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por escrito, precisara y puntualizara los presupuestos que para la formulación de una demanda laboral prevé el artículo 129 de la invocada ley burocrática.

**TERCERO.** Mediante proveído de veinte de octubre de dos mil ocho, la Tercer Integrante y Presidenta de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación tuvo a Hilario Pérez Marmolejo desahogando la vista, admitió a trámite la demanda laboral únicamente en contra de los Directores Generales de Personal, así como de Atención y Servicio, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tuvo por ofrecidas las pruebas que describió en su escrito de

**CONFLICTO DE TRABAJO 3/2008-C.**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

demanda, reservándose acordar sobre su admisión o desechamiento para el momento procesal oportuno, en términos del artículo 132 de la referida ley burocrática.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 127, 130 y 136 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ordenó emplazar y correr traslado a los demandados en este conflicto de trabajo, para que en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir del siguiente al en que les fuera notificado el acuerdo citado, dieran contestación a la demanda laboral instaurada en su contra, apercibidos que de no hacerlo en el lapso que se les concedió, o resultar ilegalmente representados, se tendría por contestada la misma en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario.

**CUARTO.** Mediante escritos presentados el veintiocho y veintinueve de octubre de dos mil ocho, ante la mesa de control de correspondencia de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, los Directores Generales de Personal y de Atención y Servicio, respectivamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contestaron la demanda dentro del plazo legal concedido, por lo que en proveído de cuatro de noviembre de dos mil ocho, se les tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma legales y por opuestas las excepciones y defensas que hicieron valer; se ordenó correr traslado al actor con copia de las referidas contestaciones y se fijó fecha para audiencia de ley.

**QUINTO.** El nueve de diciembre de dos mil ocho se llevó a cabo la audiencia que prevén los artículos 131, 132 y 133 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la que se admitieron las pruebas de las partes que cumplieron sus respectivos requisitos legales y se desecharon aquellas que no los reunieron.

**SEXTO.** Una vez desahogadas las pruebas admitidas, por auto de quince de mayo dos mil nueve se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar el expediente a la representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, para la formulación del proyecto de dictamen respectivo.

### **C O N S I D E R A N D O:**

**PRIMERO.** El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver este conflicto laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 123, apartado B, fracción XII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 152, 153 y 160 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dado que se trata de un juicio promovido por un gobernado que anteriormente prestaba sus servicios a este Alto Tribunal, el cual reclama el pago de diversas prestaciones de carácter laboral; y, además, la Comisión Substanciadora Única del

**CONFLICTO DE TRABAJO 3/2008-C.**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Poder Judicial de la Federación tramitó el procedimiento en términos de lo previsto en los artículos 152 al 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y emitió el dictamen a que se refiere el artículo 153 de este último ordenamiento legal y 1º del Reglamento de Trabajo de dicha Comisión Substanciadora, aprobado en el Acuerdo 8/89 del Pleno de este Alto Tribunal.

**SEGUNDO.** Como cuestión previa, es pertinente señalar cuáles son las prestaciones principales que hizo valer el actor Hilario Pérez Marmolejo, a saber:

1. La reinstalación en el puesto que venía ocupando de técnico de seguridad rango B CUP de confianza y del cual dice fue separado injustificadamente.

2. Pago de los salarios caídos.

3. El pago del 50% (cincuenta por ciento) de su salario, vacaciones, prima vacacional, prima quinquenal, compensación de apoyo al ahorro, prestaciones inherentes al cargo, prestaciones de previsión social, aportación de seguridad social, ayuda para seguridad individualizada, fondo para el retiro individualizado; todos del primero de febrero al diecinueve de mayo de dos mil ocho, periodo en que se le dejaron de cubrir con motivo de la suspensión decretada en el procedimiento de baja que se siguió en su contra por pérdida de confianza.

A su vez, los Directores Generales de Atención y Servicio y de Personal, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opusieron las siguientes excepciones:

1. La de prescripción ya que el actor presentó su demanda fuera del término de cuatro meses a que hace mención el artículo 113, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

2. La de falta de acción y derecho en atención a que la baja fue decretada por el Comité de Gobierno y Administración y no por los Directores Generales demandados.

3. La de falta de acción y derecho para reclamar la reinstalación y demás prestaciones, pues fue empleado de confianza y éstos únicamente gozan de la protección al salario y a los beneficios de seguridad social.

4. La de falta de acción y derecho para pretender el pago del 50% (cincuenta por ciento) de salario y demás prestaciones que no percibió por estar suspendido provisionalmente en atención al procedimiento de baja que se siguió en su contra pues debido a esa suspensión era improcedente pagarle el restante 50% (cincuenta por ciento).

En ese orden de ideas, la litis principal en el presente conflicto laboral, acorde con las pretensiones y excepciones





## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2008-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

antes sintetizadas, consiste en determinar si asiste acción y derecho al actor para reclamar la reinstalación en el puesto que ocupaba y del que fue separado por el despido del que dijo fue objeto; o bien, si la acción intentada se encuentra prescrita y si carece de acción y derecho porque el actor era trabajador de confianza y la baja se decretó por el Comité de Gobierno y Administración y no por los Directores Generales demandados. Así, una vez establecido lo anterior será factible pronunciarse sobre las diversas prestaciones accesorias que se hicieron valer por el actor.

**TERCERO.** Tomando en cuenta que en la demanda laboral el actor reclama como prestación principal la reinstalación en su cargo y que los Directores Generales demandados al contestar la demanda opusieron, entre otras excepciones, la de prescripción, es necesario analizar ésta en primer lugar por ser de estudio preferente en tanto tiene carácter perentorio e impeditivo desde el punto de vista procesal y, por ende, tiende a destruir la acción intentada, ya que de ser fundada sería innecesario el estudio de las restantes excepciones.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

***“COSA JUZGADA Y PRESCRIPCIÓN, ESTUDIO  
PREFERENTE DE LAS EXCEPCIONES DE. Las***

*excepciones de cosa juzgada y de prescripción, tienen el carácter de impeditivas desde el punto de vista procesal, supuesto que tienden esencialmente a destruir la eficacia de la acción, independientemente de su justificación intrínseca; por tanto, si la Junta responsable absolvió a la empresa demandada, porque consideró que se habían acreditado las excepciones de cosa juzgada y de prescripción opuestas por aquella, es indudable que en el amparo promovido contra el laudo de la Junta, deben estudiarse primeramente las excepciones mencionadas, y solo en el caso de que se llegue a concluir que la autoridad debió considerarlas improcedentes, pueden estudiarse y decidirse las violaciones a las leyes de procedimiento, que se invoquen en la demanda de garantías.”*  
 (Quinta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: LXXVI, Página: 1620)

Al respecto, la parte demandada opuso la excepción de prescripción y precisó que la terminación de la relación de trabajo ocurrió el diecinueve de mayo de dos mil ocho, fecha en la que el propio actor dijo que fue separado de su trabajo, por lo que a partir de esta fecha tenía cuatro meses para instaurar demanda en contra de dicha determinación, esto es, hasta el



**CONFLICTO DE TRABAJO 3/2008-C.**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

dieciocho de septiembre de dos mil ocho y no obstante su demanda laboral la presentó un día después, diecinueve de septiembre de ese año, tal como se aprecia de la razón asentada en la demanda laboral por la secretaria autorizada por la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación para recibir promociones de término, por lo que en atención a lo previsto en el artículo 113, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que transcurrió con exceso el plazo de cuatro meses que el citado numeral prevé.

Ante ello, debe señalarse que conforme a lo dispuesto en los artículos 112 a 114 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado existen dos clases de términos de prescripción en materia burocrática: genérica, cuando la ley establece el plazo de un año para ejercer las acciones que nazcan de la ley, del nombramiento otorgado a favor de los trabajadores y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo y, específica, para lo cual se señalan diversos plazos de un mes y cuatro meses, atendiendo a circunstancias especiales según la hipótesis planteada.

Entre las prescripciones específicas, el artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé la relativa a la de aquellos trabajadores que exigen la reinstalación o la indemnización que la ley concede cuando son despedidos o suspendidos en forma injustificada. En este supuesto,

conforme a la fracción II, inciso a) de ese precepto, los servidores públicos tienen cuatro meses contados a partir del momento en que son notificados del despido o suspensión, para reclamar las referidas prestaciones. El referido numeral dispone:

***“ARTÍCULO 113.- Prescriben:***

***I.- En un mes:***

***a) Las acciones para pedirla (sic) nulidad de un nombramiento, y***

***b) Las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar la plaza que hayan dejado por accidente o por enfermedad, contado el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo.***

***II.- En cuatro meses:***

***a) En caso de despido o suspensión injustificados, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la Ley concede, contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador, del despido o suspensión.***

***b) En supresión de plazas, las acciones para que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de Ley, y***

***c) La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores, contado el término desde que sean conocidas las causas.”***



CONFLICTO DE TRABAJO 3/2008-C.

En el supuesto señalado, la Segunda Sala de este Alto Tribunal sostuvo criterio jurisprudencial conforme al cual las acciones para demandar la reinstalación o indemnización a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 113 de la ley burocrática, prescriben en cuatro meses contados a partir del momento en que el servidor público es notificado del despido o suspensión, con independencia de la fecha en que se materialice cualquiera de estos actos. La referida tesis lleva por rubro, texto y datos de identificación:

***“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA A CORRER EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN CASO DE CESE O SUSPENSIÓN. De conformidad con el artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las acciones para demandar la reinstalación en la categoría desempeñada, o bien, la indemnización de ley, prescriben en cuatro meses contados a partir del momento en que el empleado público sea notificado del despido o suspensión, independientemente de la fecha en que se materialice cualquiera de estos actos, pues de atender este último criterio, significaría apartarse del verdadero sentido de la ley, hasta el extremo de integrar una norma totalmente***

***distinta a la disposición aplicable al caso concreto, cuando no da lugar a otras interpretaciones.”***

*(Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Mayo de 1996, Tesis: 2a./J. 21/96, Página: 210)*

Con base en lo anterior, el término para que opere la prescripción de la acción de reinstalación o indemnización que la ley concede en caso de despido o suspensión injustificada a que se refiere la fracción II, inciso a), del citado artículo 113, debe computarse a partir de la fecha en que el trabajador es notificado de su separación.

En esas condiciones, para estar en aptitud de pronunciarse respecto a si transcurrió o no el término prescriptivo a que se ha hecho referencia, debe atenderse a lo manifestado por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, las constancias que obran en el expediente y a las pruebas ofrecidas por éstas en el presente conflicto de trabajo.

Al respecto, el actor señaló en su demanda laboral que la resolución emitida en el procedimiento de baja se le notificó por oficio DGP/DRL/193/2008 el cual recibió personalmente el diecinueve de mayo de dos mil ocho (foja 1 de autos) y que el



## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2008-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

aviso de baja se contiene en el oficio 4361, expediente 25647, el cual se notificó con fecha diecinueve de mayo de dos mil ocho (foja 2 de autos).

Por otro lado, obran como pruebas de la parte demandada para acreditar la fecha en que fue separado el actor y notificado de esa circunstancia, el original del expediente personal número 25647 así como la confesional a cargo del actor.

A efecto de valorar las pruebas reseñadas, es necesario atender a las reglas establecidas en el artículo 137 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que establece:

***“Artículo 137. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presente, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones que se funde su decisión.”***

En mérito de lo anterior, apreciando en conciencia el acervo probatorio allegado al expediente es dable precisar que en el expediente personal del actor obra a fojas 209 del mismo, el oficio DGP/DRL/193/2008 de quince de mayo de dos mil ocho suscrito por el Director General de Personal la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dirigido al actor Hilario Pérez Marmolejo, mediante el cual se le notifica la resolución sobre el

procedimiento de baja 1/2008 emitida por el Comité de Gobierno y Administración, **recibida por el actor el diecinueve de mayo de dos mil ocho** y al que se acompañó copia certificada de la resolución que contenía la baja por pérdida de confianza.

Asimismo, en la confesional a cargo del actor se le articularon las décimo sexta, décimo séptima y décimo octava posiciones relativas a si le fue notificada la resolución del procedimiento de baja 1/2008 mediante el oficio DGP/DRL/193/2008, si reconoce la firma que ahí aparece y si reconoce el contenido del mismo, respondiendo a todas estas posiciones de manera afirmativa (fojas 349 vuelta a 350 vuelta del expediente laboral).

De la valoración adminiculada de las referidas probanzas, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, queda acreditado que al actor se le comunicó mediante oficio DGP/DRL/193/2008, que firmó de recibido el diecinueve de mayo de dos mil ocho, la resolución dictada por el Comité de Gobierno y Administración de ocho de mayo de ese año, por medio de la cual se decretó dar de baja al actor por pérdida de confianza; al referido oficio se le acompañó copia certificada de esa resolución la cual recibió el actor, como se desprende del oficio de mérito.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-53

## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2008-C.

Por tanto, la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es a partir del diecinueve de mayo de dos mil ocho, fecha en la que el actor aceptó que fue notificado de la resolución que decretó su baja por pérdida de confianza, en virtud de la cual dejó de prestar sus servicios para este Alto Tribunal.

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que en el expediente personal obre a fojas ciento sesenta y dos la documental pública consistente en el aviso de baja del actor, en la cual se aprecia que éste recibió dicho aviso el veintiséis de mayo de dos mil ocho, pues si bien en ese documento aparece que al actor se le informó en una fecha posterior a la señalada anteriormente, que se le daba de baja por pérdida de confianza y que la misma surtía efectos a partir del dieciséis de mayo de dos mil ocho, lo cierto es que el propio actor reconoció que tuvo conocimiento del oficio DGP/DRL/193/2008 el diecinueve de mayo de dos mil ocho y así se advierte de la firma de recibido de ese documento por parte del propio actor, situación que se corrobora de sus afirmaciones tanto en su demanda como en la referida prueba confesional. A similar conclusión llegó el Pleno de este Alto Tribunal al resolver el conflicto de trabajo 3/2004-C promovido por Salvador Ramos Díaz.

En ese tenor, si el trabajador no hace reclamación alguna dentro del término prescriptivo a que se refiere el numeral

mencionado impugnando las causas que dieron origen a su baja, resulta irrelevante el estudio de la causa generadora o de cualquier otra circunstancia especial que diera motivo a la separación del cargo.

En ese orden de ideas, del expediente laboral se aprecia a fojas uno vuelta, que la demanda que promovió Hilario Pérez Marmolejo fue presentada ante la secretaria de la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, autorizada para recibir promociones de término, **el diecinueve de septiembre de dos mil ocho** según constancia levantada por la referida secretaria, y fue recibida en la mesa de control de correspondencia de la propia Comisión el veintidós siguiente.

Conforme a lo expuesto, en el caso el plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo 113, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debe computarse a partir del diecinueve de mayo de dos mil ocho, fecha en la que el actor fue notificado de la baja y tuvo conocimiento de las razones y fundamentos de la misma; por lo que dicho plazo concluyó el dieciocho de septiembre del propio año, siendo que la demanda fue presentada ante la mencionada secretaria hasta el diecinueve de septiembre de ese año y recibida el veintidós siguiente ante la Comisión Substanciadora.



## CONFLICTO DE TRABAJO 3/2008-C.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Lo anterior, en atención a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la ley burocrática<sup>1</sup>, los meses para la prescripción se regularán por el número de días que le correspondan y el primer día debe contarse completo y cuando sea inhábil el último día de ese plazo, para que se tenga completa la prescripción, debe estarse al primer día hábil siguiente.

Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

***“PRESCRIPCIÓN, CÓMPUTO DE LA, EN MATERIA LABORAL. El término de prescripción de la acción laboral se computa incluyendo los días inhábiles que en el transcurso de ese lapso hubiere y sólo excepcionalmente se ve ampliado ese término cuando su último día es inhábil.”***

*(Séptima Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 400, Página: 331)*

En ese tenor, si la demanda fue presentada hasta el diecinueve de septiembre de dos mil ocho, esto es, un día después de la fecha en la que concluyó el plazo para ejercer la acción de reinstalación y cuatro días después ante la Comisión

<sup>1</sup> LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

“Artículo 117. Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el número de días que les correspondan; el primer día se contará completo y cuando sea inhábil el último, no se tendrá por completa la prescripción; sino cumplido el primer día hábil siguiente.”

Substanciadora, debe concluirse que ésta se encuentra prescrita y, por ende, resulta improcedente la pretensión del actor.

Debe significarse que, aun cuando desde la fecha en que se presentó la demanda ante la secretaria de la Comisión, ya había transcurrido el plazo de prescripción de los términos antes indicados, es a partir de que esa presentación se hace ante la referida Comisión Substanciadora que se interrumpe el término de la prescripción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, de la invocada ley burocrática, sin que surta efectos aquélla que se realizó el diecinueve de septiembre de dos mil nueve, ante la secretarías encargada de recibir promociones de término en los conflictos que se tramitan en dicha Comisión; de donde se sigue que, con mayor razón, ya había transcurrido el plazo de prescripción.

En esa virtud, al quedar plenamente acreditado que la acción de reinstalación que demandó el actor prescribió, debe concluirse que resulta fundada la excepción respectiva y, por ende, se debe absolver de dicha prestación a la parte demandada.

Conforme a lo anterior, no puede prosperar la petición de pago de los salarios caídos que por el despido reclamó la actora, ya que se trata de una prestación accesoria que sigue la

**CONFLICTO DE TRABAJO 3/2008-C.**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

suerte de la principal (reinstalación) y al no haber prosperado ésta, carece de sustento su accesoria.

Por otro lado, tampoco pueden prosperar las diversas prestaciones consistentes en el pago del 50% (cincuenta por ciento) de su salario, vacaciones, prima vacacional, prima quinquenal, compensación de apoyo al ahorro, prestaciones inherentes al cargo, prestaciones de previsión social, aportación de seguridad social, ayuda para seguridad individualizada, fondo para el retiro individualizado, que se le dejaron de cubrir del primero de febrero al diecinueve de mayo de dos mil ocho, toda vez que ello obedeció a la suspensión decretada en el procedimiento de baja por pérdida de confianza instaurado en su contra, con el 50% (cincuenta por ciento) de su salario hasta que se resolviera en definitiva sobre su baja. Dicha determinación se tomó con base en el artículo 174 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encontraba vigente al momento en que se suscitó el conflicto de trabajo y el artículo 39 del Acuerdo General de Administración I/2007 que prevén esa facultad del titular.

En ese sentido, al haber resultado improcedente la acción de reinstalación por despido injustificado intentada, es evidente que deviene improcedente el pago del 50% (cincuenta por ciento) que dejó de percibir con motivo de la suspensión decretada en el procedimiento de pérdida de confianza.

Es corolario de lo expuesto en esta resolución, determinar que la acción principal intentada por el actor resulta improcedente, por lo que debe absolverse a la demandada de todas las prestaciones que reclamó consistentes en su reinstalación, el pago de salarios caídos, y el pago de 50% de su salario, vacaciones, prima vacacional, prima quinquenal, compensación de apoyo al ahorro, prestaciones inherentes al cargo, prestaciones de previsión social, aportación de seguridad social, ayuda para seguridad individualizada, fondo para el retiro individualizado

Por lo expuesto, y además con apoyo en lo previsto en los artículos del 152 al 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

**PRIMERO.** El actor HILARIO PÉREZ MARMOLEJO no acreditó su pretensión y los demandados DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN Y SERVICIO y DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL, ambos de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN sí acreditaron sus excepciones.

**SEGUNDO.** Se absuelve a los demandados DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN Y SERVICIO y DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL, ambos de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, de las prestaciones consistentes



**CONFLICTO DE TRABAJO 3/2008-C.**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

en la reinstalación, el pago de salarios caídos, y el pago del 50% (cincuenta por ciento) de su salario, vacaciones, prima vacacional, prima quinquenal, compensación de apoyo al ahorro, prestaciones inherentes al cargo, prestaciones de previsión social, aportación de seguridad social, ayuda para seguridad individualizada, fondo para el retiro individualizado.

Devuélvase el expediente relativo a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, para los efectos de las notificaciones respectivas y en su oportunidad lo archive como asunto concluido.

**CÚMPLASE.**

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno por unanimidad de once votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Armando Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Firman el señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Secretario General de Acuerdos que da fe.

**EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA  
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA**

**EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS**

**LIC. RAFAEL COELLO CETINA**